Globethics Repository



Jamaica [Jamaica]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Buddan, Robert
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-10 19:13:36
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218688

oyuntura

Jamaica: la política de transformación en el siglo XXI

Robert Buddan

El artículo plantea que aun cuando tradicionalmente se ha vinculado la política de Jamaica con prácticas de clientelismo, corrupción y tribalismo, en la actualidad se presenta un escenario de cambios en el sistema político con miras a la transformación del modelo westminsteriano. Está surgiendo una nueva cultura política apoyada en una remozada dirigencia partidista que favorece un enfoque de la gobernanza dirigido a renovar y fortalecer la democracia y sus instituciones. El consenso y el bipartidismo auspiciarán la necesaria reforma constitucional en la era de la sociedad civil, la globalización y la integración del país al mercado y economía únicos del Caribe, con sus instituciones políticas concomitantes.

Las percepciones sobre la política jamaiquina se han formado tradicionalmente con imágenes de padrinazgo-clientelismo y otras formas asociadas de tribalismo partidista, grupos militarizados y corrupción. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que la política del Caribe, y la jamaiquina, podrían estar entrando en un periodo de reforma y transformación. Este cambio de parecer se evidencia en una serie de trabajos académicos surgidos en este comienzo del siglo XXI. Carl Stone (p. 10) sintetizó así la opinión preponderante sobre el sistema político jamaiquino:

> En el contexto jamaiquino el clientelismo ... restringe formas democráticas genuinas asociadas con la democracia parlamentaria ... promueve la autoridad personalizada y, por consiguiente, instituciones parcialmente burocratizadas, no autónomas y débiles ... fomenta niveles bajos de rendición de cuentas ... y altas concentraciones de poder personal ... retarda el desarrollo de una percepción cívica de los intereses nacionales ... desestimula la participación individual y grupal

Robert Buddan: profesor en políticas del Caribe en el Departamento de Gobierno, Mona Campus, Universidad de West Indies, Kingston, Jamaica.
Palabras clave: patronazgo, clientelismo, tribalismo, reforma constitucional, bipartidismo, Jamaica.

independiente ... Representa una democracia autoritaria cuyos contenidos democráticos son la urna de votaciones y las elecciones.

Selwyn Ryan reconoce que el sistema Westminster está arraigado en la región y ofrece algunas ideas para mejorarlo. Trevor Munroe (1999) afirma que la democracia está consolidada en Jamaica, pero que se requieren nuevas formas de democratización para evitar la decadencia del sistema. Holger Henke y Fred Reno plantean que está surgiendo una nueva cultura política que favorece estilos de liderazgo más gerenciales y una menor dependencia del patronazgo y el clientelismo. Cynthia Barrow-Giles señala que una forma de gobierno consociacional y consensual podría ser apropiada para superar las prácticas de antagonismo y conflicto típicas del sistema westminsteriano. Kenneth Hall y Dennis Benn, al igual que Ryan y Ann Marie Bissessar, han editado colecciones de ensayos sobre mejores formas de gobernanza para la región, incluyendo algunos que tratan sobre una nueva gestión pública. Munroe escribió específicamente sobre el estado de la democracia jamaiquina. Para él, el punto crucial debe ser mejorar la calidad del sistema, y eso depende del rediseño de las instituciones públicas, de la reactivación de la sociedad civil, y de la renovación de la cultura política (ibíd., p. 18). Y esas son precisamente las áreas cruciales en el presente análisis.

La orientación a la transformación del sistema parece impulsada por tres factores en particular: nuevos imperativos generacionales que retan los estilos establecidos de liderazgos partidistas; demandas de nuevas formas de gobernanza en la era de la sociedad civil y la globalización; y una integración más profunda y amplia en relación con el mercado y economía únicos y sus estructuras concomitantes de unidad política. Los líderes políticos de Jamaica y de la región han sido parte importante, y a veces no reconocida, de este movimiento en los ámbitos regional y nacional. La distinción entre «sociedad civil» y «políticos» no hace justicia a su interés en un nuevo enfoque de la política.

Los primeros ministros de Barbados, Owen Arthur, St. Vincent y las Granadinas, Ralph Gonsalves, y St. Lucia, Kenny Anthony, se cuentan entre los líderes más jóvenes, de sólida formación y claros en sus planteamientos sobre nuevas formas de gobernanza. De hecho, Anthony es el vocero de la Comunidad del Caribe (Caricom) en cuestiones de gobernanza y justicia en el ámbito de la creación de instituciones regionales. El nuevo jefe del opositor Partido Laborista de Jamaica (JLP por sus siglas en inglés, Jamaican Labour Party), Bruce Golding, está procurando diseñar una nueva política para esa organización y para su relación con el gobernante Partido Nacional del Pueblo (People's National Party, PNP).

El primer ministro de Jamaica, P.J. Patterson, quien está a punto de retirarse,

puede que pertenezca a una generación anterior, pero reconoce la necesidad de una nueva forma de abordar la gobernanza. En 1999 advirtió a sus funcionarios y al país que:

> Los cambios que están ocurriendo en nuestro mundo y en nuestro país son influyentes y fundamentales. Están aquí y se quedarán. Esto significa, por tanto, que nuestras instituciones, sistemas políticos y burocracia tienen que cambiar rápidamente o se desintegrarán y desaparecerán. Debemos cambiar nuestro enfoque de la gobernanza o nos convertiremos en parte del problema y seremos barridos por el orden social en surgimiento. Este nuevo orden social requiere una participación donde haya mayor intercambio de información y comunicación –en una forma clara y honesta– en el proceso de formulación de políticas y toma de decisiones (PNP 2000, p. 1).

A continuación Patterson procedió a formar un comité especial de su partido que produjo el documento «21st Century Mission. The New Paradigm»: una declaración de la misión del PNP para el siglo XXI bajo el nuevo paradigma político. Una de las principales preocupaciones mencionadas sigue siendo la de la integridad. Delano Franklyn (p. 21) estaba en lo correcto al decir que: «No cabe duda que el asunto de la integridad sigue siendo una preocupación principal en la política jamaiquina. A fin de fortalecer la relación entre el Estado y la población, debe hacerse cualquier esfuerzo necesario para ser más abiertos, colaboradores, incluyentes y responsables ante la ciudadanía en el manejo de los asuntos del Estado». Es en ese sentido que un nuevo enfoque de la gobernanza puede renovar la democracia y transformar el sistema en el siglo XXI.

Un nuevo orden social en surgimiento

Dos acontecimientos actuales y convergentes se erigen como un hito importante en el desarrollo de un nuevo orden político en Jamaica. Uno es la nueva dirigencia política, y el otro la nueva cultura política. El JLP está muy adelantado en su cambio generacional. Edward Seaga, líder del partido desde 1974, se retiró del Parlamento y del partido en enero de 2005, tras más de 12 años de batalla constante entre reformistas y tradicionalistas, tiempo durante el cual esta organización política fue derrotada en tres elecciones consecutivas, sufrió una división y perdió mucha credibilidad. El nuevo líder del JLP es Golding, quien en 1995 abandonó las filas del partido para formar el National Democratic Movement (NDM), pero regresó al JLP en 2002. Está considerado un líder de los reformistas y se le percibe como representante de una aproximación a la política novedosa, diferente y más bipartidista. Actualmente Golding es senador no electo, y para poder asumir el cargo de «líder de la oposición» en el Parlamento debe ser miembro electo de la Cámara de Representantes; sin embargo, el actual líder constitucional de la oposición actúa conforme a los lineamientos de Golding.

El PNP también está en un proceso de cambios en su dirigencia. El presidente del partido, Patterson, anunció en 2002 que no conduciría el PNP en las próximas elecciones generales de 2007.

Muchos sospechan que se retirará en 2005 o 2006 a más tardar. Hay cinco candidatos a ocupar su puesto, y dos de ellos ya iniciaron sus campañas. El PNP ha sido el partido gobernante por cuatro periodos consecutivos desde 1989, ganando sus elecciones más recientes en 2002. A diferencia del JLP, se ha mantenido notablemente unido y durante muchos de esos años en el poder los candidatos a suceder a Patterson han trabajado en forma conjunta y estrecha. Uno de los más destacados, Peter Phillips, fue presidente del comité especial que produjo el documento sobre la misión y el paradigma del partido en el siglo xxi. Sus credenciales en cuanto a transformación de la gobernanza están bien establecidas. Portia Simpson-Miller, quien está liderando actualmente la reforma gubernamental, también es una candidata importante. Muy probablemente el próximo presidente del PNP llevará adelante la misión transformadora del partido.

Estos cambios en las dirigencias de los partidos son de gran trascendencia para la transformación de la cultura política de Jamaica. El sistema político jamaiquino ha evolucionado alrededor de dos trayectorias opuestas, y los cambios en el liderazgo partidista actuarán a favor de la más positiva de las dos. Nos referimos a la trayectoria basada en el estilo y la forma: siendo el primero el consenso y la segunda el bipartidismo. Ambos elementos están embebidos en dos raíces institucionales del sistema político. En primer lugar, la tesis «dos partidos - un movimiento progresista» (Nettleford, pp. 47 y 57) enunciada por el fundador del PNP, Norman Manley, quien sigue siendo el principal mentor de los candidatos a asumir el liderazgo de esta organización. Manley se refería a que el sistema de partidos de Jamaica debía basarse en el bipartidismo competitivo. La otra raíz es institucional. La Constitución jamaiquina difiere del modelo matriz de Gran Bretaña en que reconoce un «líder de la oposición» en el Parlamento además del «líder de la mayoría», es decir, el primer ministro. De acuerdo con la Carta Magna se requiere que ambos líderes estén de acuerdo con los cambios fundamentales a la Constitución y que consulten entre ellos los nombramientos para altos cargos del Estado. Por consiguiente, existen razones constitucionales para un bipartidismo parlamentario que funcione conjuntamente con la tesis de Manley del bipartidismo partidista.

La trayectoria contraria y más negativa es la del tribalismo político, cuyas raíces se hunden en los orígenes ideológicos de los partidos. El JLP surgió como una organización orientada a la modernización conservadora, con énfasis en la libre empresa, las políticas laborales, el anticomunismo y las políticas externas pro-occidentales. El PNP, por su parte, surgió como un partido socialista que ponía de relieve el papel de la planificación estatal, las políticas laborales, reformas sociales, y políticas

externas del Tercer Mundo. En el ambiente de la Guerra Fría y el colonialismo, a partir de las primeras elecciones generales en 1944 cada partido se veía a sí mismo como el auténtico guardián del nuevo orden democrático.

Las raíces del tribalismo también se afincan en otras fuentes. Ambos partidos se desarrollaron con una fuerte militancia sindical, cada uno movilizando secciones diferentes de la clase obrera para obtener respaldo y usando el patronazgo partido-sindicato para otorgar empleos y beneficios sociales. Por otra parte, esas raíces también yacen en el control estatal. Después de la independencia política en 1962, los partidos compartieron alternadamente el control de los recursos del Estado, pero en el sistema «el ganador se lo lleva todo», característico de la política westminsteriana, tales recursos se veían como fuentes de patronazgo gubernamental.

El tribalismo se arraiga igualmente en el estilo de liderazgo. Los dirigentes carismáticos y autoritarios de los partidos han usado el patronazgo como un instrumento de poder personalizado, y esto a su vez ha reforzado el culto a la personalidad. Finalmente, las raíces del tribalismo yacen en el «electoralismo». La formación de distritos electorales «asegurados», defendidos por militantes armados, sobre todo en las áreas urbanas, ha causado violencia política y electoral y ha contribuido a tribalizar el sistema político.

Nunca ha sido correcto describir el sistema político jamaiquino como tribal o como consensual. De hecho, este sistema ha oscilado alternadamente entre niveles altos y moderados de política de ambos estilos. Las nuevas dirigencias partidistas representan la trayectoria más consensual y antitribal. En la víspera de su elección a la jefatura del JLP en febrero de 2005, Golding afirmó que «el tipo de política 'tribal' que ha practicado Jamaica durante tantos años ha causado daños incalculables al pueblo jamaiquino; a nuestra situación económica; a la propia vida de las personas que habitan en los distritos electorales donde ha predominado más el tribalismo político» (*Sunday Gleaner*, 16/1/05). Golding le recordó a los jamaiquinos que él había formado el NDM y en las elecciones de 1997 había basado su plataforma electoral en «la destribalización de la política y un compromiso con el bienestar de las comunidades del casco urbano, donde la polarización ha traumatizado tanto a la gente y la ha dividido» (ibíd.).

En 1994, Patterson, en un discurso de lanzamiento de la campaña en favor de mejores valores y actitudes reconoció que: «La lucha en torno de beneficios escasos y botines políticos ha contribuido a crear una sociedad polarizada en la que funcionamos como tribus hostiles, al parecer perpetuamente en guerra, en lugar de trabajar juntos para hacer realidad una meta común» (Munroe 2003, p. 2). En su documento «21st Century Mission. The

New Paradigm», el PNP declaró que el nuevo paradigma «requiere que evitemos el partidarismo mezquino y el tribalismo, y que extendamos la mano de la cooperación a todos los individuos y grupos que comparten un compromiso patriótico y que acogen los objetivos y propósitos de nuestro movimiento» (PNP 2000, p. 26).

Es en esta convergencia donde subyace el potencial para un nuevo orden político, y es en esta nueva cultura política donde se encuentran las oportunidades de transformación en dirección de una nueva gobernanza partidista y parlamentaria. La experiencia ha demostrado que el nuevo bipartidismo debe apoyarse en una cultura política igualmente nueva. No puede descansar solo en la filosofía de «dos partidos - un movimiento», aunque ésta siga siendo válida, o en las actuales disposiciones del consenso parlamentario westminsteriano.

En su documento de declaración de misión, el PNP señaló lo que requería este nuevo paradigma cultural de la política (ibíd., pp. 17-18). El partido consideraba que:

> El antiguo orden consistente en un sistema de gobierno cerrado, distante y autoritario tiene que cambiar y convertirse en uno incluyente, con espíritu de responsabilidad y de rendición de cuentas. El antiguo orden, en el que los políticos creían poseer todas las respuestas a todas las preguntas, con consultas apenas periódicas y percibidas básicamente como una formalidad, debe dar paso a un nuevo orden que tome en cuenta opiniones múltiples y divergentes para incorporarlas en una política coherente. El antiguo orden, donde los partidos dispensaban favores y las instituciones del Estado eran alienantes y burocráticas, debe ser reemplazado por otro con estructuras y funciones nuevas para el Estado y los partidos políticos. El antiguo orden, en el que dominaban el partidarismo mezquino y el tribalismo, debe cambiar hacia otro en donde los partidos lleguen a todos aquellos que son parte del desarrollo patriótico y progresista del país. El antiguo orden, donde el Estado era ente supremo, debe dar paso a un orden nuevo de globalización que reta las decisiones nacionales y en el cual los ciudadanos quieren mayor autonomía de sus gobiernos.

Por su parte, en la visión de Golding sobre un nuevo orden político (*Sunday Gleaner*, 16 y 23/4/95) en el país:

> Se eliminó la violencia política y el tribalismo, especialmente la contaminación de la poderosa narcocultura de «distritos electorales guarnicionados»; cambió la percepción ampliamente generalizada de corrupción política y de que los políticos solo se ocupan de cuidar de sí mismos y de sus compinches; se subsanó la excesiva centralización del poder en el primer ministro que lleva a una «dictadura constitucional»; se corrigió la ineficacia de una representación política en la cual se castra al Parlamento y se ve a los parlamentarios como representantes del partido y no del pueblo.

Estas posiciones resumen los criterios de los dos partidos sobre cómo debería ser el nuevo orden político.

Reforma y transformación

En esas ideas de transformación está la evidencia de una nueva cultura política, y ellas existen tanto en los partidos como en la sociedad. Es probable que esta «insurrección» cultural se encuentre más avanzada en Jamaica que en el resto del Caribe angloparlante. En los últimos 10 años ha surgido una serie de propuestas sobre diversas maneras de cambiar el sistema político.

La jefatura partidista. En el PNP existe un grupo de *lobby* autodenominado «Campaña para la transformación». Su líder, Paul Burke, fue un candidato perdedor y de último minuto a uno de los cuatro cargos de vicepresidente del partido en las elecciones de enero de 2005. Burke quiere que se separen los cargos de presidente del partido y primer ministro. Él cree que la transformación va a requerir que el presidente del partido dedique una atención de tiempo completo al trabajo partidario. Esto dejaría al primer ministro en libertad de dirigir toda su atención a los asuntos de gobierno. Esta diferenciación de funciones crearía también una agenda del partido clara y precisa, separada de la agenda del Gobierno, y diluiría el poder combinado de la persona que ejerce ambos cargos. Además, permitiría que el partido monitoree y evalúe mejor el desempeño de la administración. Este movimiento aún no ha obtenido el respaldo de la dirigencia del partido. No existe una campaña equivalente en el JLP.

El PNP está considerando también establecer elecciones directas para la presidencia del partido en las cuales votarían todos los miembros, y no solo los delegados. De hecho, ya se introdujo una resolución en este sentido en la conferencia anual de enero de 2005. Phillip Paulwell, miembro del gabinete ministerial, aboga por este cambio; el presidente del partido, Patterson, parece estar a favor de un sistema de ese estilo; y el Comité sobre Gobernanza del partido también apoya el cambio. Sin embargo, la resolución fue rechazada con el alegato de que era irrealizable en el presente. El problema parece ser la sospecha de que un cambio en el sistema de elección del presidente en estos momentos podría tener la intención de favorecer a un candidato particular en la actual competencia por la sucesión. No obstante, el partido ofrece el argumento de que se está concentrando en regularizar sus organizaciones «grupales» (partido local) para identificar primero el número de grupos y de delegados que tendrían derecho a votar en las próximas elecciones para presidente del partido con cualquier sistema electoral. En el JLP no existe una campana equivalente en pro de elecciones directas para la jefatura del partido.

La jefatura del Gobierno. En ambos partidos existe cierto respaldo al establecimiento de límites al mandato del primer ministro. Esta fue una de las ideas que acompañó el modelo de separación de poderes al estilo estadounidense que presentó Golding cuando formó el NDM. Aunque éste parece haberse apartado de ese modelo, la asociación de jóvenes profesionales del JLP, Generation 2000 (G2K), y su equivalente en el PNP, The Patriots, apoyan la idea. Puede ser que Golding todavía esté de acuerdo con establecer ciertos límites al mandato, pero ni él ni los candidatos a la sucesión en el PNP han dicho nada al respecto. Una semana antes de la conferencia del JLP

de febrero de 2005, en la cual se eligió a Golding como jefe de esa organización política, un importante miembro del partido, Mike Henry, pidió nuevamente que se fijaran límites a la duración de ese cargo específicamente, a fin de detener los frecuentes desafíos que han acosado la jefatura del partido por tanto tiempo. El líder interino de la oposición, Ken Baugh, dice que la idea no cuenta con el respaldo suficiente para cambiar la constitución del partido (*Sunday Gleaner*, 13/2/05).

El Secretariado. El PNP ha aceptado la idea de que el secretario general del partido debe desempeñar esa función a tiempo completo y no pertenecer al gabinete de gobierno. En 2003 nombraron a un ministro en funciones para ese cargo, pero se trata de un arreglo temporal. Al mismo tiempo, el partido también contrató dos subsecretarios generales adicionales, con lo que ahora son cuatro los secretarios adjuntos. Estos cuatro subsecretarios son personas jóvenes y no son miembros del Parlamento. El partido también empleó un nuevo asistente de investigaciones y espera reorganizar su departamento de archivos e investigación. Incluso hay planes, aunque paralizados de momento, para una nueva sede. El nuevo secretario general, Burchell Whiteman, ministro de Información, dijo que el propósito de todo esto es «reconstruir, reinstrumentar y reestructurar» el partido (*Jamaica Observer*, 29/9/03). En cuanto al JLP, como se encuentra en la oposición, este partido no enfrenta la cuestión de separar el cargo de secretario general del rango ministerial, y también ha nombrado cuatro subsecretarios.

Desempeño de los representantes parlamentarios. Ha surgido una variedad de ideas para mejorar el desempeño de los miembros de la Cámara de Representantes. Entre las más importantes se incluyen: crear descripciones del trabajo para los representantes y encargados del distrito electoral; proporcionarles oficinas permanentes en cada distrito financiadas por el Estado; requerir que cada distrito establezca organizaciones para su administración; tener un sistema para retirar a los representantes que no cumplan sus funciones; realizar auditorías del desempeño de los distritos electorales; tener directrices claras para la selección de candidatos; aumentar las asignaciones presupuestarias para los representantes de las jurisdicciones electorales.

Esta última proposición ha sido particularmente controversial. Afecta el Programa de Asistencia Social y Económica. Aunque Golding solicitó una mayor asignación de recursos a los representantes de los distritos electorales para sus proyectos específicos, lo que proporcionaría mayor independencia de las asignaciones parlamentarias centralizadas, al parecer la ciudadanía cree que esto podría ser una suerte de política «electorera», es decir, de patronazgo. Por otra parte, para los parlamentarios el trabajo del dis-

trito electoral exige tanto de sus salarios que uno de ellos afirmó que preferiría un aumento en los fondos para los proyectos del distrito que un incremento equivalente de su salario[1].

Sin embargo, es posible solucionar este dilema aumentando tales asignaciones, no para el representante, sino para las propuestas organizaciones de administración de los distritos electorales, si se les audita apropiadamente. La idea de establecer tales organizaciones (Constituency Management Organisations) se remonta a las recomendaciones del Comité Stone sobre desempeño parlamentario de 1990. No obstante, los distritos han seguido sufriendo el mal estado de las dependencias y de la infraestructura en general. Muchos tienen problemas para pagar sus facturas de servicios públicos. Esto ha aumentado la simpatía por la idea de que el Estado financie permanentemente las oficinas de distrito electoral para los miembros del Parlamento.

La integridad del proceso político. El proceso político padece una pérdida de credibilidad. Los partidos reconocen que para tener un futuro deben reconstruir la fe en el proceso y la confianza en los políticos. Con ese fin se han propuesto diversas reformas que incluyen el financiamiento de las campañas, la asignación no partidista de cargos en proyectos públicos, códigos de conducta para candidatos y campañas, un defensor (*ombudsman*) político para monitorearlos, criterios electorales claros para los candidatos, y mejoras en la administración relacionada con elecciones.

Cuando se aproximaban las elecciones generales de 2002, el PNP y el JLP dijeron que estaban a favor de más transparencia en las contribuciones financieras privadas a los partidos y los candidatos (*The Gleaner*, 27/8/02). Eso no solo respaldaría el principio de «una persona, un voto», de manera que cada voto tenga la misma influencia, sino que además aseguraría que no entre dinero «sucio» en el sistema político. Por otra parte, garantizaría que los candidatos pasen más tiempo haciendo su trabajo que el empleado en recolectar fondos para sus campañas. Un proceso más transparente de contribuciones financieras permitiría a la opinión pública juzgar si los contratos se están otorgando a cambio de mayores contribuciones para intereses especiales.

Munroe, senador del PNP, introdujo en el Senado una propuesta de reforma del financiamiento de campañas. Sin embargo, el necesario acuerdo con el JLP se atascó desde 2003 cuando el ex-jefe de este partido, Seaga, acusó a un candidato a uno de los puestos directivos del JLP de haber contado con «dinero manchado». Aunque Seaga retiró la acusación posteriormente, ésta

1. Un parlamentario del partido gobernante hizo esta declaración en un seminario realizado por la Mona School of Business en nombre del Comité Clarke sobre Salarios Parlamentarios en 2003.

arrojó dudas sobre la seriedad del JLP en cuanto a la reforma de las leyes de donaciones para campañas, pues hay quienes creen que la afirmación de Seaga tal vez no era falsa, solo que posiblemente no pudo o no quiso probarla. Entre la ciudadanía todavía se debate si el Estado debería financiar totalmente las campañas o solo parcialmente. La opinión pública es cautelosa en este asunto; algunos jamaiquinos creen que el dinero de los contribuyentes no debería ser usado para respaldar la elección de «políticos corruptos».

La integridad del proceso político se vio fortalecida con la designación de un defensor político en 2002, a tiempo para monitorear códigos de conducta electorales en las elecciones generales de ese año. El funcionario declaró su respaldo a la reforma del financiamiento de las campañas (*The Gleaner*, 6/9/02). La confianza del público en el proceso político se reforzó con esas elecciones. Antes de las votaciones, el máximo líder del opositor JLP dijo que el sistema electoral había estado en su mejor forma en mucho tiempo (*The Gleaner*, 8/8/02). Ambos partidos se declararon satisfechos con el proceso electoral, y observadores locales e internacionales le atribuyeron un gran progreso, caracterizando sus resultados como limpios y libres.

El proceso parlamentario. El PNP y el JLP acordaron el establecimiento de una Comisión Constitucional que presentó su informe provisional en 1995. El PNP había introducido el asunto de una reforma extensa en la agenda de 1975, durante el gobierno de Manley. Bajo la jefatura de Seaga, el JLP había apoyado la modificación del modelo de Westminster, pero mostró poco entusiasmo en cuanto a un verdadero cambio constitucional. Golding, sin embargo, al formar el NDM, incluyó esa reforma como una propuesta primordial. Él favorecía el modelo de separación de poderes. Aunque parece haberse alejado de ese modelo desde que regresó al JLP, el escenario luce más adecuado para que los partidos vuelvan a revisar las recomendaciones de la Comisión Constitucional, y los acuerdos logrados entre miembros de la Comisión, la sociedad civil y el Parlamento.

El Parlamento de Jamaica tiene una Cámara Alta, el Senado, constituida por 21 miembros por designación, de los cuales 13 son nombrados por el gobernador y 8 por la oposición. La Comisión Constitucional recomendó que se aumente el número de miembros a fin de que el Senado refleje una muestra representativa de la población más amplia, y para que tenga una mejor proporción de representantes partidistas en relación con los votos recibidos por los partidos, y más senadores independientes.

La Cámara Baja de Jamaica, o de Representantes, tiene 60 miembros electos, pero es posible que este número aumente a entre 63 y 65 en el futuro cer-

cano. La Comisión Constitucional recomendó que los miembros del Parlamento estén sometidos a la posibilidad de juicio de destitución; que hagan sus juramentos de lealtad y de cargo al pueblo de Jamaica y no al monarca británico (promulgado por ley de 2002); que los términos «líder de la minoría» y «líder de la mayoría» reemplacen los vocablos más antagónicos «líder de la oposición» y «líder del Gobierno»; que los miembros del Parlamento declaren sus activos a una Comisión de Integridad (promulgado por ley); que se limite la proporción de miembros de la Legislatura que pueden ocupar cargos en el Ejecutivo; que se estimule una respuesta expedita de cuestiones parlamentarias; que se asignen tiempos específicos para debatir mociones particulares de los miembros; que se extienda el trabajo de los comités parlamentarios para incluir funciones vitales de supervisión; y que se haga la confirmación parlamentaria de los nombramientos para cargos nacionales estratégicos.

Si bien aún no se ha logrado la reforma constitucional, el Gobierno, respondiendo a presiones de la sociedad civil y de la oposición, ha establecido una serie de instituciones para mejorar la probidad del proceso político, siendo las principales la Comisión de Integridad, la Oficina de Licitaciones Públicas (como contractor general), y la Comisión Nacional de Contratos. Igualmente se han aprobado leyes importantes tales como la Ley para la Prevención de la Corrupción y la Ley de Libertad de Información, y se han conformado comités de investigación como el Comité Nacional sobre Tribalismo Político y el Comité Nacional sobre Delincuencia y Violencia.

La reforma constitucional todavía elude al país y Patterson ha dicho que, como primer ministro, lamenta no hacer realidad ese objetivo. Es posible que ahora el proceso de reforma reciba un nuevo aliento con el cambio de jefatura en el JLP. El PNP y el JLP están de acuerdo en que Jamaica debe convertirse en una república. Sin embargo, nuevos acontecimientos complicaron las oportunidades de un avance inmediato de la reforma de la Constitución. En febrero de 2005, el Consejo Privado (Privy Council) británico sentenció que tres proyectos de ley aprobados por el Parlamento jamaiquino para permitir que el país se uniera a la Corte de Justicia del Caribe (CJC) eran inconstitucionales. Según la sentencia, era necesario que la CJC estuviera primero arraigada en la Constitución del país. Actualmente el PNP y el JLP están adelantando conversaciones bipartidistas; según el primer ministro éstas deberían incluir otros asuntos nacionales y constitucionales tales como la pena de muerte, la Carta de Derechos y el estatus de República, conjuntamente con la cuestión de la CJC. La sentencia del Consejo Privado es un revés para el plan del Gobierno de que Jamaica ingrese al mercado y economía únicos de la Caricom, donde la CJC actuaría como el tribunal

para asuntos comerciales y posiblemente como corte final de apelaciones. Sin embargo, también ofrece la oportunidad para el acuerdo bipartidista en asuntos más amplios de reforma constitucional.

Golding fue electo máximo líder del JLP el 20 de febrero de 2005, y ha abierto la puerta a una amplia gama de ideas sobre reforma política y constitucional. Muchas de ellas ya habían sido aprobadas por los representantes de los partidos en la Comisión Constitucional, por ejemplo la reforma del sistema westminsteriano de gobierno y una mayor separación de los poderes o frenos-equilibrios más fuertes, como la Carta de Derechos, la posibilidad de destitución de funcionarios públicos y el establecimiento de una Comisión Electoral. Otros asuntos en agenda son la revocación del mandato de parlamentarios que no cumplan sus funciones, fechas fijas para las elecciones, la pena de muerte y la posibilidad de que la CJC sea la corte final de apelaciones del país (*Daily Observer*, 21/2/05). Algunos analistas piensan, correctamente, que la delincuencia, la educación y la economía también recibirán atención en las conversaciones (*The Gleaner*, 15/2/05). La elección de Golding y el estilo consensual de Patterson son buenos augurios para el predominio del bipartidismo y un mayor consenso en los años venideros, y para el progreso de la política de transformación.

Bibliografía

Barrow-Giles, Cynthia: *Introduction to Caribbean Politics*, Ian Randle Publishers, Kingston, 2002.

Franklyn, Delano (ed.): *The Challenges of Change-PJ Patterson Budget Presentations, 1992-2002*, Ian Randle Publishers, Kingston-Miami, 2004.

Hall, Kenneth y Dennis Benn (eds.): *Governance in the Age of Globalization*, Ian Randle Publishers, Kingston, 2003.

Henke, Holger y Fred Reno (eds.): *Modern Political Culture in the Caribbean*, University of the West Indies Press, 2003.

Hylton, Anthony: «The Case for State Funding of Political Parties and Candidates», 2004, inédito.

Joint Select Committee of the Houses of Parliament on Constitutional and Electoral Reform: «Final Report», mayo de 1995.

Munroe, Trevor: *Renewing Democracy into the Millennium. Barbados, Jamaica, Trinidad and Tobago*, University of the West Indies Press, 1999.

Munroe, Trevor: «A Note on Partisan Political Involvement in Job Allocation», 2003, inédito.

National Committee on Political Tribalism: «Report», 1997.

National Committee on Crime and Violence: «Report», 2002.

Nettleford, Rex (ed.): *Manley and the New Jamaica. Selected Speeches and Writings*, Longman Caribbean, 1971.

People's National Party, PNP: «21st Century Mission. The New Paradigm», Kingston, 2000.

People's National Party, PNP: «Plan for Action. Transforming and Rebuilding the Party», noviembre de 2003.

Ryan, Selwyn: *Winner Takes All: The Westminster Experience in the Caribbean*, Institute of Social and Economic Research (ISER), St. Augustine, 1999.

Ryan, Selwyn y Ann Marie Bissessar (eds.): *Governance in the Caribbean*, Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies, University of the West Indies, 2002.

Stone Committee: «Report of the Committee to Examine Ways of Strengthening the Roles and Performance of Parliamentarians», 1990.

Stone, Carl: *Democracy and Clientelism in Jamaica*, Transaction Books, New Brunswick-Londres, 1980.